



Maite Pagazaurtundua - European Parliament
Bât. Willy Brandt 05M055
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel

Bruselas, 19 de enero de 2024

Estimado Comisario Reynders,

El pasado mes de diciembre le envié las últimas informaciones sobre los ataques a la separación de poderes que se están produciendo desde el gobierno de Pedro Sánchez. Ataques derivados de los acuerdos de gobierno entre el partido de Pedro Sánchez y partidos populistas e independentistas que aplican practicas incompatibles con el ordenamiento jurídico y que afectan a la Justicia.

Esos acuerdos se concretan en leyes como la de la Amnistía a delitos de terrorismo y corrupción, y en la creación de comisiones parlamentarias en el Congreso de los Diputados para investigar la “judicialización de la política”, con competencia para emprender acciones de responsabilidad contra los jueces .¹

Sin embargo, también se producen desde el propio gobierno ataques dirigidos hacia los jueces, en general, y contra algunos jueces, en particular, que menoscaban la autonomía del poder judicial, fundamental para el correcto funcionamiento de un sistema democrático.

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha dicho que el juez Manuel García-Castellón "tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles".²

La ministra ha hecho estas declaraciones después de que el juez de la Audiencia Nacional se reafirmara en su tesis de que el Tribunal Supremo debe investigar a por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont en la causa abierta en torno al movimiento *Tsunami Democràtic*.

Concretamente, la vicepresidenta ha dicho que "hay algunas personas (...) que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno frente a lo que suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio del poder judicial", sugiriendo con ello un supuesto *lawfare* del magistrado.

Ha añadido que "yo sería muy cauta con respecto a la manera en la que se estaba pronunciando este juez, que como digo nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que evidentemente tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles". A la pregunta de si cree que al juez García Castellón le pueda guiar un criterio político, ha

¹ El Tribunal Supremo ha indicado que “la fiscalización de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado” es “incompatible” con la independencia judicial.

² https://www.ondacero.es/noticias/espana/ribera-critica-querencia-juez-garcia-castellon-pronunciarse-momentos-politicos-sensibles_2024011965aa4430d8aa250001ca2eb8.html

contestado: "la hemeroteca demuestra que siempre tiene mucho acierto en las fechas y en la sensibilidad de las fechas".

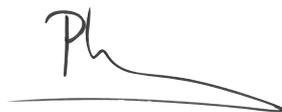
Estas palabras han sido respaldadas por la vicepresidenta Segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha dado la razón a su compañera en el Ejecutivo a pesar de reconocer que no había escuchado sus palabras.

Comisario, la Unión Europea se basa en principios fundamentales, entre ellos, el respeto a la separación de poderes. Los ataques al estado de derecho amenazan con socavar este principio esencial, comprometiendo la independencia del sistema judicial y poniendo en peligro la integridad del sistema democrático. Cuando los ataques a la independencia judicial se producen desde el poder, su gravedad es aún mayor pues buscan crear una onda expansiva de cautela, miedo y autocensura que es precisamente lo que no debe darse en democracias sanas.

Los jueces y fiscales españoles se han pronunciado ya públicamente --en un movimiento histórico-- alertando de la amenaza y presión real por parte del poder político, pero necesitan del amparo de las instituciones europeas ante lo que viven a diario.

Está en juego la aplicación de nuestro ordenamiento jurídico, que no puede quedar al albur de la deriva populista del Gobierno de España.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a long, sweeping horizontal line that tapers to the right.

Maite Pagazaurtundúa

Vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia
y Asuntos de Interior en el Parlamento Europeo